



Expediente: 4/18. Clasificaciones contradictorias. Interpretación del artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Clasificación del informe: 7. Capacidad y solvencia de la empresa. 9. Clasificaciones de las empresas. 9.1. Régimen general

El Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco ha planteado consulta a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en los siguientes términos:

“A través de la presente solicito de esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa, informe sobre la interpretación y alcance del artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE; de 26 de febrero de 2014.

Dicho artículo reza como sigue:

“Artículo 80. Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentes.

1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública.

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que las haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras. En la adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.



No obstante, una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación en un determinado grupo o subgrupo otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación. A tal efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de clasificación las clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo otorgarse a la empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo.

Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una misma empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación."

Sobrevienen dudas de interpretación que derivan del apartado 2 en lo que la Ley llama "clasificaciones divergentes", y más concretamente en los párrafos segundo y tercero de dicho apartado. Se desea evacuación de informe sobre las siguientes cuestiones:

1.- Teniendo en cuenta que el artículo 80 tiene carácter básico en su totalidad (Disposición final primera), ¿la entrada en vigor de la Ley implica sin mayor requisito que no podrá otorgarse clasificación en categoría superior a aquélla que hubiera sido otorgada por otra Comisión Clasificadora?

2.- En tal caso, ¿debe denegarse la categoría solicitada, bastando la referencia a este artículo?

3.- ¿Los mecanismos reglamentarios que se articularán de acuerdo con el último párrafo difieren la entrada en vigor de este apartado hasta que sean dictados? La Disposición final decimosexta, en su tercer párrafo, parece indicar que no (la del art. 150 es la única referencia que hace a que un párrafo "entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere"; luego a sensu contrario, el resto de artículos y párrafos no deben esperar a tal desarrollo reglamentario).



CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco nos ha planteado consulta acerca de la interpretación del artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este precepto, en la parte que atañe al presente informe, señala lo siguiente:

“1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública.

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que las haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras. En la adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

No obstante, una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación en un determinado grupo o subgrupo otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación. A tal efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de clasificación las clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo otorgarse a la empresa solicitante



una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo.

Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una misma empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación.”

2. La interpretación del precepto transcrito es clara en cuanto a la finalidad perseguida por el legislador, pues si bien se debe respetar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan conceder a las empresas la clasificación para licitar en los contratos públicos propios de su ámbito de competencia, es necesario establecer un sistema que evite que puedan solaparse las clasificaciones de distintas Administraciones (del Estado con alguna Comunidad Autónoma o de estas entre sí) provocando un efecto desfavorable para la seguridad jurídica y que puede generar confusión en cuanto a las condiciones propias de las empresas.

Con este fin el legislador ha establecido un sistema en el que no es posible disponer simultáneamente de clasificación en un determinado grupo o subgrupo otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación. Para garantizar el cumplimiento de esta restricción la ley configura como obligatorio que las empresas que soliciten una determinada clasificación indiquen si tienen una clasificación previa vigente en alguna de las Administraciones Públicas competentes para otorgarlas. En caso de que fuera así se produciría una suerte de congelación competencial, de modo que si se solicita una clasificación superior ante otro ente formalmente competente para concederla, este no podrá otorgar una más elevada de aquella que ya disfrutaba el solicitante con carácter previo.

Por tanto, la respuesta a la primera cuestión planteada por la entidad consultante debe ser afirmativa en el sentido de que la entrada en vigor de la ley supone que no será posible obtener una clasificación superior de aquella que previamente hubiera sido otorgada por otra comisión clasificadora con carácter previo.



3. La consecuencia de la anterior conclusión es que ante una petición en que se den las condiciones que hemos venido describiendo, esto es, que se trate de una empresa que disfrute de una clasificación ya otorgada y que solicite una superior ante otra comisión clasificadora también competente, dicha petición ha de ser automáticamente denegada por no respetar lo dispuesto en el artículo 80 de la ley.

Esta afirmación, que resulta necesariamente de la propia letra del precepto, no excluye que la aplicación de la norma pueda generar alguna dificultad práctica puesto que obligaría a quien quisiera obtener una clasificación superior a solicitarla primero ante la misma entidad que le otorgó la que actualmente disfruta. Tal circunstancia es menos gravosa en el caso de que se deba solicitar al Estado, pues la clasificación otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tiene efectos generales frente a todos los órganos de contratación y, sin embargo, plantea problemas si la clasificación preexistente es de una Comunidad Autónoma, pues en este caso a la empresa no le queda más remedio que solicitarla dos veces (primero ante la Comunidad Autónoma y luego ante el Estado con la misma calidad) o a renunciar a la clasificación primeramente otorgada para, de este modo, reclamar la que le corresponda ante el Estado o ante otra Comunidad Autónoma.

4. Por lo que se refiere a la posible eficacia demorada de la norma legal cuestionada, ha de darse la razón al consultante en el sentido de que nada autoriza a concluir que la eficacia del precepto esté condicionada a la entrada en vigor del desarrollo reglamentario a que alude el inciso final del apartado segundo del precepto. Es cierto que dicho desarrollo reglamentario tiene por finalidad articular los mecanismos necesarios para evitar la coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una misma empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación. Claramente se exige que se tomen por la vía reglamentaria medidas para evitar que esta circunstancia pueda llegar a producirse, intención que no es diferente de la que marca, con un criterio general, la ley. Sin embargo, esto no quiere decir que si esta circunstancia se produce mientras no existe todavía desarrollo reglamentario la prohibición de clasificaciones divergentes, tal como las llama la norma, no sea perfectamente eficaz y válida una vez que entre en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.



Por todo lo expuesto, esta Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado entiende que procede alcanzar las siguientes:

CONCLUSIONES.

1. La entrada en vigor de la ley supone que no será posible obtener ante otra Administración Pública (Estado o Comunidades Autónomas) una clasificación superior de aquella que previamente hubiera sido otorgada por otra comisión clasificadora con carácter previo.
2. En el caso de que se produzca una solicitud de clasificación por parte de una empresa que disfrute de una clasificación ya otorgada por otra Administración Pública (Estado o Comunidades Autónomas) y que solicite una superior ante otra comisión clasificadora también competente, dicha petición ha de ser automáticamente denegada por no respetar lo dispuesto en el artículo 80 de la ley.
3. La eficacia de artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público no está condicionada a la entrada en vigor del desarrollo reglamentario a que alude el inciso final del apartado segundo del precepto.